

★ Editorial

La ofensiva del poder contra el tejido social siempre ha ubicado como objetivo a destruir las organizaciones de los pueblos indios. La razón es obvia: ahí se ubican los procesos más desarrollados de organización autónoma de la sociedad.

La construcción del acueducto Independencia, de 152 kilómetros de largo entre la presa El Novillo y la capital de Sonora, que atraviesa el territorio de la Tribu Yaqui, representa un acto más de despojo llevado a cabo por el poder político.

Este 3 de octubre, la juez María del Rosario Alcántar Trujillo ordenó por tercera ocasión parar la obra hidráulica para obedecer la suspensión provisional ordenada el año pasado. Ya antes, el 14 de marzo, Alcántar abrió un incidente por desacato al gobierno del estado. También envió un exhorto al juzgado de distrito en Hermosillo para usar la fuerza pública con el objetivo de retirar la maquinaria y parar la construcción del acueducto. A pesar de lo anterior, las autoridades no sólo no han hecho caso, sino que insisten en declarar que la obra continuará.

El gobernador del estado, el panista Guillermo Padrés Elías, ha querido presentar la situación como un conflicto entre los que se preocupan por dotar de agua a la ciudad de Hermosillo y los que se oponen a ello. La realidad es que se trata de asestar un golpe definitivo en contra de la Tribu Yaqui, a la que se viene saqueando desde hace más de 150 años.

Por su parte, el pueblo de Ostula, en Michoacán, sigue viviendo un clima de agresión. No le perdonan la decisión que tomó hace varios años de recuperar lo que le pertenecía como pueblo originario y dar los primeros pasos en la construcción de un territorio autónomo. Apenas el 6 de octubre pasado fue asesinado con arma de fuego el comunero Pedro Leyva Domínguez en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan, lo que representa una fuerte agresión a la lucha de la comunidad por el territorio y la autonomía. Este crimen se suma a las decenas que ya se han cometido en el pasado en contra de los habitantes de este pueblo.

En Chiapas, el gobernador del estado, Juan Sabines, está implementando una política de agresión constante en contra de las comunidades zapatistas. Para esto ha echado mano tanto de viejos grupos paramilitares como de los partidos políticos que actúan como tales. Su táctica ha sido combinar las agrasiones paramilitares con una presencia en los medios de comunicación, en especial en el diario *La jornada*, donde se publican inserciones pagadas como si fueran noticias, que buscan crear la imagen de que no hay ningún problema en ese estado. Sin embargo, en lo cotidiano, las comunidades enfrentan tanto una política de agresión como la añeja política de la zanahoria. Más aún, Sabines utiliza a tontos útiles como Emilio Álvarez Icaza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, para hacer declaraciones a todo



pulmón sobre cómo el gobierno del estado se ubica a la vanguardia en el respeto de los derechos humanos, ya que cuenta con una ley sobre el tema.

La realidad del estado es otra: ahí se está librando una batalla entre las comunidades indígenas zapatistas, por un lado, y el gobierno por el otro. La característica de individuos como Álvarez Icaza es precisamente su capacidad para derramar incienso ante los hombres del poder.

Mientras, arriba, el circo se desarrolla en múltiples pistas. La guerra de lodo está a todo lo que da y los medios se entretienen con ella: que si Miguel Ángel Yunes acusa al ex gobernador del PRI en Veracruz de ser el Zeta 1 ó si éste recuerda que el segundo fue acusado por participar en los actos de pederastia que Zuckar Kuri llevó a cabo en Quintana Roo. En la práctica, ambos tienen razón cuando se acusan y ambos mienten cuando se defienden.

En otra pista circense está el nuevo bodrio que se le acaba de ocurrir a un grupo de intelectuales y políticos: los gobiernos de coalición. Lo mismo que los que se oponen porque no quieren gobernar con nadie que les haga sombra. En la práctica, ambos sacan la oreja filisteas de la antidemocracia. Unos porque quieren hacer gobiernos de transacción, y los otros porque evidencian que, de llegar al gobierno, solamente gobernarán con su sombra de compañía.

El abismo entre lo que son los temas de interés para los de abajo y los de arriba cada vez es más profundo. Unos resisten a los planes de gobierno de los otros, llenos de expropiaciones en contra de las comunidades indígenas. Otros, en cambio, se preparan para ser tapete de los hombres del dinero y a llevar a cabo una política de tierra arrasada que pretende eliminar a esos pueblos como tales.

Dejemos que otros se entretengan con la política de arriba, lo que anuncian las movilizaciones como las que están teniendo lugar en Grecia, el Estado Español, Chile, así como los ocupas de Wall Street, es que algo nuevo y muy profundo se está manifestando.

Una nueva forma de expresión social frente a una crisis económica y política que, si bien representa la continuidad de otras que han existido en el pasado, también tiene una serie de características inéditas, en tanto ahora está siendo evidente algo que los zapatistas han venido planteando desde hace muchos años: se trata de una guerra total en contra de la humanidad, sus culturas y civilizaciones.

La ventaja que tenemos en México es que, por lo menos en una parte del territorio nacional, esa lógica de miseria y muerte no funciona. Por eso, las comunidades zapatistas son un objetivo estratégico a recuperar y hacia allá dirige sus planes el actual gobernador, con el aval de sus palafreneros y sus tontos útiles.